


BENEFICIÓ CON 119 MDP A SU HERMANO

Investigan a Francisco Chíguil; tejió red de corrupción familiar

NOEL F. ALVARADO
El exalcalde de GAM y actual senador también ayudó a su esposa y allegados con recursos de la demarcación

FOTOL CORTESÍA


El caso del "clan Chíguil" se ha convertido en símbolo del uso patrimonial del poder en la CdMx

Autoridades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectaron irregularidades en contratos en la administración de Francisco Chíguil Figueroa como alcalde de Gustavo A. Madero, por más de 119 millones de pesos, por lo que quedó al descubierto una nueva trama de presunta corrupción que sacude a Morena en la capital.

Documentos oficiales revelan que Francisco Chíguil Figueroa, exalcalde de Gustavo A. Madero y hoy senador suplente de Morena, habría favorecido con más de 119 millones de pesos en contratos públicos a empresas controladas por su propio hermano, Saúl Chíguil Figueroa, así como a su esposa y socios cercanos.

Durante la revisión de los contratos, se logró descubrir que sus dos gestiones al frente de la alcaldía (2018-2021 y 2021-2024), la administración de Chíguil otorgó adjudicaciones directas y licitaciones presuntamente amañadas a compañías ligadas a su círculo íntimo, contraviniendo la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que impide a los servidores públicos intervenir en procesos donde existan intereses personales o familiares.

Entre las firmas beneficiadas destacan Fórmula Orión, Ingeniería y Tecnología Orión y Ficsa Fórmula, registradas

en 2020 a nombre de Saúl Chíguil, su esposa e hijos. Detrás de ellas aparece un personaje clave: Jorge Luis Fernández Barragán, administrador de dos de esas empresas y representante legal de Erika Monserrat Gutiérrez López, una de las contratistas más consentidas por la GAM.

Según la Plataforma Nacional de Transparencia, Gutiérrez López recibió entre 2020 y 2024 más de 18.8 millones de pesos en contratos por servicios que iban desde material de limpieza hasta productos funerarios. Fernández Barragán figura además como apoderado le-

gal de Mantenimientos y Construcciones Especiales I, compañía que durante el mandato de Chíguil acumuló nueve contratos por 83.7 millones de pesos.

El esquema también incluye a Virginia Vázquez Hernández, presunta socia de Ingeniería y Tecnología Orión, quien obtuvo tres contratos adicionales por 13.5 millones para obras de mantenimiento y suministro de materiales.

El escándalo político escaló cuando, tras dejar la alcaldía en 2023 para coordinar la campaña de Clara Brugada Molina, actual jefa de Gobierno, Chíguil fue recompensado con cargos para su familia: su esposa, Beatriz Rojas Martínez, fue nombrada directora del DIF Ciudad de México.

El caso del "clan Chíguil" se ha convertido en símbolo del uso patrimonial del poder en la Ciudad de México. Para analistas y legisladores de oposición, esta red representa una muestra más del deterioro ético dentro del morenismo capitalino, donde la lealtad política parece pesar más que la transparencia.

A la sombra de este escándalo, la administración de Brugada enfrenta la presión de marcar distancia y demostrar que la llamada "transformación" no tolera la impunidad, mientras crece el reclamo ciudadano por una investigación real y sanciones ejemplares.

El caso deja al descubierto una herida abierta en la administración pública: la frontera entre lo público y lo familiar se ha borrado bajo el amparo del poder político, exhibiendo un modelo de corrupción que sigue repitiéndose en la capital del país.

CORTESÍA


La administración de Chíguil otorgó adjudicaciones directas y licitaciones presuntamente amañadas a compañías ligadas a su círculo íntimo